

Intervención:
Demandante

Interviniente:

Abogado:
Francisco De Borja Virgos De
Santisteban

Procurador:

Demandado

ONEY SERVICIOS
FINANCIEROS EFC SAU

SENTENCIA

En La Orotava a uno de septiembre de dos mil veintidós.

Vistos por Dña. _____, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción Número Uno de La Orotava, los presentes autos de juicio
ORDINARIO nº 582 de 2021 seguidos a instancias de la Procuradora **DÑA.**

actuando en nombre y representación de **D.**

asistido del Letrado **D. FRANCISCO DE BORJA VIRGOS DE
SANTISTEBAN** contra **ONEY SERVICIOS FINANCIEROS EFC SAU** representada por el
Procurador **D.** _____ y asistida por el Letrado **D.**

sobre nulidad de contrato.

En nombre de S.M. el Rey ha pronunciado la presente resolución en virtud de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que por la Procuradora Dña. _____, actuando en nombre
y representación acreditada en el encabezamiento se presentó escrito de demanda en el cual
después de exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó
con la súplica que se dictase sentencia según los pedimentos obrados, esto es, se declarara
la nulidad radical y absoluta del contrato de crédito revolvente por usurario y subsidiariamente
la nulidad de las cláusulas de interés remuneratorio, comisión por impagos y, en ambos casos,

se condene a la demandada a reintegrar la diferencia entre el capital efectivamente prestado y la cantidad realmente abonada por el actor por todos los conceptos y que exceda del capital prestado con ocasión del referido contrato, junto con sus intereses legales, así como las costas procesales.

SEGUNDO. - Admitida a trámite mediante decreto de 13 de octubre de 2021, y se dio traslado al demandado por plazo de veinte para que contestara a la misma, lo cual realizó en tiempo y forma oponiéndose a las pretensiones, en virtud de los argumentos que vertió en dicho escrito, alegando prescripción de la acción.

TERCERO. - Convocadas las partes a la audiencia previa, por diligencia de ordenación de fecha 14 de junio de 2022, ésta se celebró, el día 27 de julio de 2022, en la cual la parte actora ratificó su demanda y la demandada su contestación. Abierto el período probatorio se propuso documental, por lo que tras el resumen de prueba quedaron los autos vistos para sentencia.

CUARTO. - Que en la tramitación de los presentes autos se han observado las formalidades legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ejercita el actor juicio para la declaración de nulidad del contrato en cuestión, por cuanto suscribió un contrato de tarjeta de crédito el 20 de junio de 2017, con la entidad demandada con un importe inicial a su disposición de 1000 euros, sin que se le informara de las condiciones financieras del contrato, entre ellas el precio, se introduce como condiciones un Tae de 29,89 %, siendo una cláusula predispuesta, impuesta por la demandada, además se imponen cláusulas de reclamación de posiciones deudoras. Frente a ello contesta la demandada alegando que se contrató la tarjeta Leroy Merlin que tiene varias formas de pago, pero no es un crédito revolving, que el demandante fue informado de ello y, en todo caso, este solo ha pagado 424 euros en concepto de intereses, aplicándose un 22,28% de interés para las formas de pago a revolving y no un 29,89% como alega la parte demandante, sino que este es el límite máximo que permite aplicar el contrato pero que nunca se aplicó al demandante. También discute la parte demandada la calificación que realiza la parte demandante de la cuantía indeterminada del procedimiento puesto que considera que es de cuantía determinada, siendo esta la constituida por los intereses abonados que cifra en 424 euros. Por ello pide la desestimación íntegra de la demanda y la condena en costas de la parte demandante.

SEGUNDO. - En este caso dado que existe controversia entre las partes, se hace necesario fijar primero la naturaleza del contrato y el tipo de interés aplicado. La parte demandante alega que suscribió con la demandada un contrato de tarjeta revolving en el que se aplicaba un interés TAE de 29, 89%, frente a ello, la entidad demandada niega el carácter revolving del crédito ya que, alega, se trata de una contrato de tarjeta Leroy Merlin que tiene varias formas de pago pero no es un crédito revolving, además, sostiene que el interés aplicado al demandante fue del 22, 28% TAE, por tratarse de formas de pago a revolving y no un 29,89% que es el límite previsto en el contrato para estas formas de pago, pero que nunca se aplicó al

demandante. En relación con la naturaleza o no de revolving del contrato de tarjeta, llama la atención que la parte demanda primero niegue tal naturaleza y luego acuda a ella para justificar el interés aplicado y el posible error en el interés denunciado, lo que supone un reconocimiento implícito de la naturaleza revolving del contrato de tarjeta, si bien, ello no prueba en sí su carácter usurario, sino que esto dependerá del interés aplicado que, según la parte demandante fue de un TAE de 29,89% y según la parte demandada fue de 22,28%, aunque el contrato preveía una horquilla de 0 a 29,89%, pero sin que nunca se aplicara este máximo al demandante. Al margen de la improcedencia del juicio de valor realizado por la demandada, cuando cuestiona si procede iniciar un proceso por “solo” 424 euros de intereses, obviando, además, que la naturaleza de crédito revolving supone que los intereses se han acumulado al capital generando más intereses exponencialmente, lo cierto es que del análisis de la documentación aportada se deduce que el interés aplicado fue el 22,28% TAE, sin embargo, resulta trascendental que el contrato permitiera llegar hasta el 29,82% según la forma revolving elegida en cada operación concreta. En este sentido, se hace necesario recordar la redacción del artículo 3 Ley de Azcárate de 23 de julio de 1908 cuando dispone que “ Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”. Por tanto, si el contrato “estipulaba” un interés de hasta el 29,82% TAE es este del que se ha de partir para determinar o no el carácter usurario del contrato, puesto que lo contrario supondría que podría darse la paradoja de no considerar nulo, y por tanto en vigor, un contrato que permite aplicar un interés que puede ser usurario, pero sobre el que la sentencia no se ha pronunciado por no haberse aplicado con anterioridad a ella. Por ello, razones de seguridad jurídica y eficacia practica exigen analizar el carácter usurario o no del interés máximo permitido por el contrato, en este caso el 29,82% TAE.

TERCERO. - Solicita el actor se declare la nulidad del contrato por usurario, en dicho contrato se estipuló un interés remuneratorio TAE 29,82 % , el problema consiste en que si dicho interés debe considerarse usuario al amparo de la Ley de Azcárate de 23 de julio de 1908. El art. 1 de la Ley de 23 de Julio de 1.908, junto al requisito de la estipulación de un interés notablemente superior al normal del dinero, exige para calificar de usurario un préstamo, bien que dicho interés sea manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o que resulte leonino dadas las condiciones en que se pactó, añadiendo como requisito común a los dos supuestos anteriores que existan motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario, a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales. Por consiguiente, según la Ley de Azcárate, no bastaba para calificar de usurario un préstamo el requisito objetivo de la desproporción entre el interés estipulado y el normal del dinero en el momento de su contratación, sino que además, el precepto citado exige un elemento subjetivo y causal que justifique su aceptación por el prestatario, y que en cierto modo vicie la voluntad contractual, privándola de su necesaria autonomía y libertad, eje del sistema obligacional de nuestro derecho. Sin embargo, en la actualidad, la figura del

financiado ocupa un lugar preeminente, y la autonomía de la voluntad consagrada en el art. 1.255 del Código Civil, se halla condicionada por las necesidades del consumidor. De ahí que hoy en día ya no se requiera la concurrencia de los dos requisitos.

La Ley de Azcárate, Ley de Usura de 23 de julio de 1908, en su artículo 1 declara nulos los contratos de préstamo calificados de usuarios, mereciendo tal calificación, según la Jurisprudencia:

1. aquellos en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso;
1. aquellos en que se consignent condiciones que resulten lesivas o en que todas las ventajas establecidas lo sean en favor del acreedor; y
2. aquellos en que se suponga recibida una cantidad mayor que la efectivamente entregada», habiendo declarado la STS de 30 de diciembre de 1987 , que «la calificación de usuario o no respecto de un contrato de préstamo, constituye un juicio de valor que versa sobre el supuesto fáctico, juicio respecto del cual el art. 2º de la Ley de 23 de julio de 1908, concede a los Tribunales una gran libertad de criterio, que sólo puede combatirse proyectando la atención sobre el hecho de la calificación jurídica; y, por otro lado, se ha declarado que la citada Ley es aplicable también a los contratos mercantiles» (STS 13 de noviembre de 1975).

La Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2009 recuerda los efectos de la declaración de nulidad de un contrato usuario precisando: "El artículo 3 de la Ley sobre Represión de la Usura de 23 de julio de 1908 establece que «declarada con arreglo a esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan solo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado» , precepto que se ha de poner en relación con el artículo 6.3 del Código Civil, en cuanto establece que «los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención» , como es en este caso la fijación legal de la obligación del prestatario de devolver la suma realmente recibida. En consecuencia, la declaración de nulidad del contrato de préstamo usurario produce como efecto fundamental el de que el prestatario está obligado a entregar tan solo lo recibido de tal modo que queda dispensado de pagar cualquier clase de intereses, usurarios o legítimos".

CUARTO. - Por lo tanto, la cuestión se circunscribe a si el interés pactado en el contrato de tarjeta de crédito merece la consideración de usurario a tenor de la Ley de Usura de 23 de julio de 1908, como hemos expuesto. Las tarjetas de crédito normalmente se contratan sin ningún tipo de garantía accesoria, a diferencia de lo que ocurre en otras modalidades de contratación financiera, lo que justifica que el interés fuera elevado. Pero la trascendencia práctica de estos pactos, que en importes mínimos de disposición podía ser irrelevante, puede producir efectos usuarios cuando la cuantía dispuesta sea más elevada. Sin embargo, la posibilidad de declarar usurario un interés remuneratorio para las compras de bienes, cuando el interés contratado sea superior al normal del dinero ha sido puesto de relieve en la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre 2015, la misma declara: "La flexibilidad de la regulación

contenida en la Ley de Represión de la Usura ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas. El art. 315 del Código de Comercio, establece el principio de libertad de la tasa de interés, que en el ámbito reglamentario desarrollaron la Orden Ministerial de 17 de enero de 1981, vigente cuando se concertó el contrato entre las partes, y actualmente el art. 4.1 Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios. Mientras que el interés de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un consumidor puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones, como declaramos en las sentencias de 22 de abril y de 8 de septiembre de 2015, la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter "abusivo" del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable.

QUINTO. - En este marco, la Ley de Represión de la Usura, se configura como un límite a la autonomía negocial del artículo 1255 del Código Civil, aplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito «sustancialmente equivalente» al préstamo. Así lo ha declarado el TS en sentencias, como la de 18 de junio 2012, 22 de febrero de 2013, 2 de diciembre de 2014. A partir de los primeros años cuarenta, la jurisprudencia de esta Sala volvió a la línea jurisprudencial inmediatamente posterior a la promulgación de la Ley de Represión de la Usura, en el sentido de no exigir que, para que un préstamo pudiera considerarse usurario, concurrieran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art. 1 de la ley. Por tanto, y en lo que al caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, « que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso », sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija « que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

Cuando en las sentencias de 18 de junio de 2012 y de 2 de diciembre, exponíamos los criterios de "unidad" y "sistematización" que debían informar la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, nos referíamos a que la ineficacia a que daba lugar el carácter usurario del préstamo tenía el mismo alcance y naturaleza en cualquiera de los supuestos en que el préstamo puede ser calificado de usurario, que se proyecta unitariamente sobre la validez misma del contrato celebrado. Pero no se retornaba a una jurisprudencia dejada atrás hace más de setenta años, que exigía, para que el préstamo pudiera ser considerado usurario, la concurrencia de todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el párrafo primero del art. 1 de la Ley. El recurrente considera que el crédito "revolving" que le fue concedido por Banco Sygma entra dentro de la previsión del primer inciso del art. 1 de la Ley de Represión de la Usura, en cuanto

que establece un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado en relación con las circunstancias del caso. La Sala considera que la sentencia recurrida infringe el art. 1 de la Ley de Represión de la Usura por cuanto que la operación de crédito litigiosa debe considerarse usuraria, pues concurren los dos requisitos legales mencionados.

Dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio , « se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor », el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados. Este extremo es imprescindible (aunque no suficiente por sí solo) para que la cláusula que establece el interés remuneratorio pueda ser considerada transparente, pues no solo permite conocer de un modo más claro la carga onerosa que para el prestatario o acreditado supone realmente la operación, sino que además permite una comparación fiable con los préstamos ofertados por la competencia.

El interés con el que ha de realizarse la comparación es el "normal del dinero". No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés « normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia. Para establecer lo que se considera "interés normal" puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuenta corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.). Esa obligación informativa de las entidades tiene su origen en el artículo 5.1 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (BCE), que recoge la obligación de este último, asistido por los bancos centrales nacionales, de recopilar la información estadística necesaria través de los agentes económicos. Para ello, el BCE adoptó el Reglamento (CE) nº 63/2002, de 20 de diciembre de 2001, sobre estadísticas de los tipos de interés que las instituciones financieras monetarias aplican a los depósitos y a los préstamos frente a los hogares y a las sociedades no financieras; y a partir de ahí, el Banco de España, a través de su Circular 4/2002, de 25 de junio, dio el obligado cumplimiento al contenido del Reglamento, con objeto de poder obtener de las entidades de crédito la información solicitada.

SEXTO.- La reciente sentencia del TS en pleno de 4 de marzo de 2020 ha determinado que la referencia del «interés normal del dinero» que ha de utilizarse para determinar si el interés de un préstamo o crédito es notoriamente superior al interés normal del dinero:

1.- Para determinar la referencia que ha de utilizarse como «interés normal del dinero» para realizar la comparación con el interés cuestionado en el litigio y valorar si el mismo es usurario, debe utilizarse el tipo medio de interés, en el momento de celebración del contrato, correspondiente a la categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionada. Y si existen categorías más específicas dentro de otras más amplias (como sucede actualmente con la de tarjetas de crédito y revolving, dentro de la categoría más amplia de operaciones de crédito al consumo), deberá utilizarse esa categoría más específica, con la que la operación

crediticia cuestionada presenta más coincidencias (duración del crédito, importe, finalidad, medios a través de los cuáles el deudor puede disponer del crédito, garantías, facilidad de reclamación en caso de impago, etc.), pues esos rasgos comunes son determinantes del precio del crédito, esto es, de la TAE del interés remuneratorio.

2.- A estos efectos, es significativo que actualmente el Banco de España, para calcular el tipo medio ponderado de las operaciones de crédito al consumo, no tenga en cuenta el de las tarjetas de crédito y revolving, que se encuentra en un apartado específico.

3.- En el presente caso, en el litigio sí era discutido cuál era el interés de referencia que debía tomarse como «interés normal del dinero». Y a esta cuestión debe contestarse que el índice que debió ser tomado como referencia era el tipo medio aplicado a las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving publicado en las estadísticas oficiales del Banco de España, con las que más específicamente comparte características la operación de crédito objeto de la demanda.

4.- En consecuencia, la TAE del 26,82% del crédito revolving (que en el momento de interposición de la demanda se había incrementado hasta el 27,24%, ha de compararse con el tipo medio de interés de las operaciones de crédito mediante tarjetas de crédito y revolving de las estadísticas del Banco de España, que, según se fijó en la instancia, era algo superior al 20%, por ser el tipo medio de las operaciones con las que más específicamente comparte características la operación de crédito objeto de la demanda. No se ha alegado ni justificado que cuando se concertó el contrato el tipo de interés medio de esas operaciones fuera superior al tomado en cuenta en la instancia.

5.- Al tratarse de un dato recogido en las estadísticas oficiales del Banco de España elaboradas con base en los datos que le son suministrados por las entidades sometidas a su supervisión, se evita que ese «interés normal del dinero» resulte fijado por la actuación de operadores fuera del control del supervisor que apliquen unos intereses claramente desorbitados.

Aunque al tener la demandante la condición de consumidora, el control de la estipulación que fija el interés remuneratorio puede realizarse también mediante los controles de incorporación y transparencia, propios del control de las condiciones generales en contratos celebrados con consumidores, en el caso objeto de este recurso, la demandante únicamente ejercitó la acción de nulidad de la operación de crédito mediante tarjeta revolving por su carácter usurario.. El extremo del art. 1 de la Ley de 23 julio 1908, de Represión de la Usura, que resulta relevante para la cuestión objeto de este recurso establece:

Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso ».

A diferencia de otros países de nuestro entorno, donde el legislador ha intervenido fijando porcentajes o parámetros concretos para determinar a partir de qué tipo de interés debe considerarse que una operación de crédito tiene carácter usurario, en España la regulación de la usura se contiene en una ley que ha superado un siglo de vigencia y que utiliza conceptos claramente indeterminados como son los de interés «notablemente superior al normal del dinero» y «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso». Esta indeterminación obliga a los tribunales a realizar una labor de ponderación en la que, una vez fijado el índice de referencia con el que ha de realizarse la comparación, han de tomarse en consideración diversos elementos.

La sentencia del Juzgado de Primera Instancia consideró que, teniendo en cuenta que el

interés medio de los créditos al consumo correspondientes a las tarjetas de crédito y revolving era algo superior al 20%, el interés aplicado por Wizink al crédito mediante tarjeta revolving concedido a la demandante, que era del 26,82% (que se había incrementado hasta un porcentaje superior en el momento de interposición de la demanda), había de considerarse usurario por ser notablemente superior al interés normal del dinero.

En el caso objeto de nuestra anterior sentencia, la diferencia entre el índice tomado como referencia en concepto de «interés normal del dinero» y el tipo de interés remuneratorio del crédito revolving objeto de la demanda era mayor que la existente en la operación de crédito objeto de este recurso. Sin embargo, también en este caso ha de entenderse que el interés fijado en el contrato de crédito revolving es notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso y, por tanto, usurario, por las razones que se exponen en los siguientes párrafos.

El tipo medio del que, en calidad de «interés normal del dinero», se parte para realizar la comparación, algo superior al 20% anual, es ya muy elevado. Cuanto más elevado sea el índice a tomar como referencia en calidad de «interés normal del dinero», menos margen hay para incrementar el precio de la operación de crédito sin incurrir en usura. De no seguirse este criterio, se daría el absurdo de que para que una operación de crédito revolving pudiera ser considerada usuraria, por ser el interés notablemente superior al normal del dinero y desproporcionado con las circunstancias del caso, el interés tendría que acercarse al 50%.. Por tal razón, una diferencia tan apreciable como la que concurre en este caso entre el índice tomado como referencia en calidad de «interés normal del dinero» y el tipo de interés fijado en el contrato, ha de considerarse como «notablemente superior» a ese tipo utilizado como índice de referencia, a los efectos que aquí son relevantes. Han de tomarse además en consideración otras circunstancias concurrentes en este tipo de operaciones de crédito, como son el público al que suelen ir destinadas, personas que por sus condiciones de solvencia y garantías disponibles no pueden acceder a otros créditos menos gravosos, y las propias peculiaridades del crédito revolving, en que el límite del crédito se va recomponiendo constantemente, las cuantías de las cuotas no suelen ser muy elevadas en comparación con la deuda pendiente y alargan muy considerablemente el tiempo durante el que el prestatario sigue pagando las cuotas con una elevada proporción correspondiente a intereses y poca amortización del capital, hasta el punto de que puede convertir al prestatario en un deudor «cautivo», y los intereses y comisiones devengados se capitalizan para devengar el interés remuneratorio.

Como dijimos en nuestra anterior sentencia 628/2015, de 25 de noviembre, no puede justificarse la fijación de un interés notablemente superior al normal del dinero por el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil (en ocasiones, añadimos ahora, mediante técnicas de comercialización agresivas) y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, pues la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico. Por tanto, la justificación de esa importante diferencia entre el tipo medio aplicado a las tarjetas de crédito y revolving no puede fundarse en esta circunstancia. Todo ello supone que una elevación porcentual respecto del tipo de interés medio tomado como «interés normal del dinero» de las proporciones concurrentes en este supuesto, siendo ya tan elevado el tipo medio de las operaciones de crédito de la misma naturaleza, determine el carácter usurario de la operación de crédito.

Hay que señalar que esta doctrina jurisprudencial ha sido recientemente reiterada por la STS 367/2022 de 4 de mayo, como así recoge expresamente en su fundamento tercero “ En la citada sentencia 149/2020, de 4 de marzo, afirmamos que para determinar la referencia que ha de utilizarse como "interés normal del dinero" para realizar la comparación con el interés cuestionado en el litigio y decidir si el contrato es usurario, debe utilizarse el tipo medio de interés, en el momento de celebración del contrato, correspondiente a la categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionada. Y que, si existen categorías más específicas dentro de otras más amplias (como sucede con la de tarjetas de crédito y revolving, dentro de la categoría más amplia de operaciones de crédito al consumo), deberá utilizarse esa categoría más específica, con la que la operación crediticia cuestionada presenta más coincidencias (duración del crédito, importe, finalidad, medios a través de los cuáles el deudor puede disponer del crédito, garantías, facilidad de reclamación en caso de impago, etc.), pues esos rasgos comunes son determinantes del precio del crédito, esto es, de la TAE del interés remuneratorio”.

Conforme a la anterior doctrina, en el caso que nos ocupa, debemos acudir a las tablas publicadas por el Banco de España para el año 2017, en las que la TAE aplicada a las operaciones de tarjeta de crédito con pago aplazado era de 20,79%, por tanto hay entender que un interés con un TAE del 29,89% debe calificarse de usurario ya que existe un interés notablemente superior al normal del dinero en la fecha en que fue concertado el contrato, de más de 9 puntos, lo que supone una elevación desorbitada. En este caso se hace necesario aclarar, dado que era un hecho controvertido entre las partes el tipo de interés aplicado, que un interés del 22, 28% también hubiera sido considerado por esta juzgadora como usurario ya que, conforme a la doctrina expuesta, cuanto mayor es el interés más se reduce el margen para que sea calificado o no de usurario, sin que concurra ninguna circunstancia jurídicamente atendible que justifique un interés casi dos puntos por encima de un ya elevado 20,79%. Por lo expuesto, procede declarar la nulidad del contrato por usurario y por lo que al actor se le deberá devolver lo cobrado de más respecto al capital derivado de la disposición de la tarjeta bien lo haya empleado en compras de bienes o bien mediante disposición de efectivo.

En cuanto a la cuantía del procedimiento, es indeterminada pues se ejercita como acción principal la de nulidad, siendo la reclamación de cantidad consecuencia legal y accesorio de aquella.

SEPTIMO. - Por lo que a las costas se refiere dada la estimación de la demanda procede la condena a la demandada vencida en esta primera instancia, según dispone el artículo 394 LEC.

Vistos los preceptos aplicados y demás de general aplicación

FALLO

Que debo estimar la demanda interpuesta por la Procuradora **DÑA.**

actuando en nombre y representación de **D.**

asistido del Letrado **D. FRANCISCO DE BORJA VIRGOS DE**

SANTISTEBAN contra **ONEY SERVICIOS FINANCIEROS EFC SAU** representada por el Procurador **D.** y asistida por el Letrado **D.**

sobre nulidad de contrato y en su consecuencia, debo declarar la nulidad radical del contrato tarjeta de crédito el 20 de junio de 2017 por usuario, con todos los efectos legales inherentes a dicha declaración, y se reintegre la diferencia entre el capital efectivamente prestado y la cantidad realmente abonada por el actor por todos los conceptos y que exceda del capital prestado con ocasión del referido contrato, junto con sus intereses legales, debiendo la demandada realizar la liquidación del contrato, así como la condena a las costas procesales causadas en esta primera instancia.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para los autos, juzgando en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

EL/LA JUEZ